

á la consignacion de aquellos en el Vapor americano "California."

En esas actuaciones el Juez de Distrito con fecha 2 de Diciembre del año anterior, determinó:

Primero: son esteógrafas las velas manifestadas por dicho cargo, pertenecientes á la carga de tránsito vendida de San Francisco en el Vapor americano "California" el 28 de Junio último, á la consignacion de los Sres. Sandoval y Bullo de este comercio.

Segundo: así por esta suplantacion como por las deudas encontradas por la Aduana en el despacho de dicha carga, y confiscada por la mencionada casa consignataria, pagará esta el cinco por ciento de los derechos de importacion ó sea el doble de los de tránsito, y repondrá el papel del sello 50 cumplido en estas actuaciones.

Visto este negocio en 2ª instancia, el Tribunal de Circuito de Mazatlan, en 12 de Diciembre del año citado, declaró: 1º Se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada en este juicio en 2 de Octubre último por el Juzgado de Distrito de Sonora.

Habienlo causado ejecutoria la sentencia de 2ª instancia, y no encontrándose motivos fundados para hacer responsabilidad, el que suscribe es de opinion se dé por revisado este proceso.

México, Febrero 4 de 1874.—Altamirano.

—

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 11 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, y archívese á su vez el Toca.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Guzman.*—*Zavala.*—*Lanza*, secretario.

Es copia. México, Febrero 18 de 1874.—*Alejo Gomez Eguiarte.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por varios ciudadanos, contra la aplicacion de algunas disposiciones de la ley electoral de 12 de Diciembre de 1872, y decreto de 27 de Setiembre de 1870, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: nuevamente han ocurrido á ese Juzgado las mismas personas con pocas excepciones, que el 2 del corriente pidieron amparo contra las elecciones municipales de la Capital, entablando esta vez el propio recurso, como miembros de los clubs independientes, contra las elecciones de diputados al Congreso del Estado que debian verificarse el domingo último. Alentados sin duda, por el éxito mas que favorable, ante el C. Juez 2º suplente, de su primer ocurso, sus pretensiones, en el presente no se limitan como en aquel á solicitar la proteccion individual de lo que llamaron sus garantías constitucionales atacadas, sino que piden ya abiertamente la suspension de las elecciones de diputados, no solo en la Capital, sino en todo el Estado, y la derogacion de la ley electoral de 12 de Diciembre de 1870 y decreto número 370. Recusan tambien, como en su primer ocurso, al Juez propietario, al primer suplente y al secretario.

El Promotor cree de su deber, ante todo, llamar la atencion de ese Juzgado sobre una notable irregularidad que contiene el expediente y que confirma lo que antes habia llegado ya á su noticia por el rumor público. Concluyendo el ocurso de amparo en el principio de la foja 3ª y siguiendo en la misma foja las providencias del Juez propietario y 2º suplente, ¿que significan las fojas 4ª y 5ª que se encuentran á continuacion no del todo llenas de firmas? Si estas pertenecen al escrito de amparo, ¿por qué no se senta-

ron á su continuacion y antes de los autos del Juzgado? y si no pertenecen, ¿con que motivo y para que fin las agregó el C. Juez 2º suplente? La fustracion con que se procedió en el negocio, recogiendo las firmas referidas despues de dictado el decreto de suspension, se vé demostrada con esa circunstancia. Sobre este particular pide el fiscal que se haga en la sentencia definitiva la demostracion correspondiente.

El C. Juez 2º suplente, que se abocó al conocimiento del negocio, no debió haber dado curso á la demanda por su notoria improcedencia, segun los artículos 102 de la Constitucion general, y 2º de la ley orgánica de amparos; pero ya que lo hizo ¿como acceder á las avanzadas é ilegales pretensiones de los amparantes sin contraer una gravísima responsabilidad?

No obstante, el C. Juez 2º suplente decretó sin vacilar la suspension de las leyes citadas en el ocuso, apoyándose en que este se fundaba en las mismas causas que el presentado el 2 del corriente, lo que no es cierto; en que habia los mismos temores de que se trastornase el órden público en el Estado, lo que no puede ser motivo de amparo; y en que solo así podia garantir el voto de los peticionarios en la computacion general, equivalente á desamparar á todos los ciudadanos de Jalisco en su derecho de elegn, con infraccion palmaria de la fraccion I, artículo 35 de la Constitucion federal.

Pero consumado ya ese hecho atentario bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo decretó, hoy debe ocuparse el Juzgado de resolver sobre lo principal. Para fundar el Promotor en este particular su parecer negativo á los amparantes, le basta lo dicho hasta aquí y referirse en todo al informe rendido por el C. Gobernador, que trata el negocio extensamente y bajo diversas facetas, agregando algunas ligeras observaciones.

Cuesta trabajo desde luego, al examinar el ocuso de amparo, comprender lo que realmente pretenden en justicia los peticionarios; y si no estuviera de manifiesto que

se proponen el fin político de derrocar la administracion actual disorganizando el Estado por medio de la respectable Justicia de la Union, que no debe prestarse á tan reprobados manejos, podria creerse que ninguno de los peticionarios supo lo que firmó y que el mencionado ocuso fué redactado en medio de un extravío mental.

Bajo el conocimiento del Juzgado está el juicio de amparo que se entabló el 2 del corriente. Ahí se quajan los firmantes del decreto número 370, porque dió mas amplitud á lo que ellos llaman su derecho exclusivo de intervenir en las elecciones mediante sus fiscales, derecho establecido por la ley electoral del Estado; y en el presente juicio piden amparo contra la mencionada ley, justamente porque les otorgó aquel derecho, que se empuñan en titular un privilegio exclusivo, y porque la crecen contraria, por tal motivo, á los artículos 8º y 9º de la Constitucion. Y aunque el reasumir pretenden presentar un argumento de dos filos, porque si la ley citada no ataca los artículos que mencionan, entonces el decreto 370, por su fuerza retroactiva, resulta contrario al 14 de la misma Constitucion: lo que realmente resulta cierto, es que divagan en sus razonamientos y que son del todo opuestos y contradictorios entre sí los fundamentos de su pretension.

¿Y como poder aplicar su argumento de doble fuerza para todas las elecciones del Estado? Si en esta Capital existen clubs políticos con privilegios exclusivos contrarios á la Constitucion, ¿con esos privilegios no respetados por una ley retroactiva, si hay municipales presidentes en las casillas electorales que son empleados, y si se han destinado los fiscales para masas diferentes de las que se les señalaron; ¿por qué suspender las elecciones en todas las otras poblaciones del Estado, donde no hay clubs, ni fiscales, ni municipales que sean empleados?

Pero se dice que la suspension general es necesaria para que los peticionarios no queden privados de sus derechos electorales en

la computacion general. ¿Y quien los priva de sus derechos sino ellos mismos que no solicitan la proteccion individual para emitir y garantizar su voto, sino la imposibilidad de emitirlo y de que se les garántice, la supresion del acto electoral en que podian ejercerlo? Ellos mismos, que al pedir la suspension general de las elecciones en el Estado, han atacado de lleno en todos los ciudadanos uno de los derechos mas sagrados que tienen segun nuestras instituciones.

Cree el Promotor que la evidencia de las verdades que envuelven sus anteriores consideraciones, hace inútil añadir otros razonamientos; repite que tanto la suspension decretada como el amparo pedido, son contrarios á los artículos 102 de la Constitución y 29 de su ley reglamentaria, por prohibir terminantemente que se hagan declaraciones generales sobre las leyes ó actos que motiven los amparos; y considerando en este ocurso mas marcada la malicia de los peticionarios que en el que presentaron el 2 del corriente, con fundamento de lo dicho y del artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo.

Primero: que se revoque la suspension interinaria decretada por el C. Juez 29 suplente.

Segundo: que la Justicia de la Union no ampare ni proteja á los petentes, contra las leyes del Estado que mencionan.

Y tercero: que se les imponga la multa de mil pesos.

Guadalajara, Noviembre 12 de 1873.—*A. Camarena.*

Es copia para el Semanario Judicial. Guadalajara, 15 de Noviembre de 1873.—*A. Camarena.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Febrero de 24 1874.—Vis-
tos: Ochenta y cinco CC. de los Clubs inde-
pendientes de esta Ciudad, los mismos con
pocas escepciones que solicitaron amparo y

TOMO V.—PARTE II.

proteccion contra las disposiciones y actos relativos á las elecciones municipales, del 2 de Noviembre del año anterior, ocurrieron el dia 6 del citado mes al Juzgado de Distrito de ésta Capital, intruyendo un nuevo amparo, aunque con los mismos fundamentos del anterior, contra los decretos número 204 ó sea la ley electoral del Estado, y el número 370 que modifica la precedente disposicion. Segun ellos, los artículos 28, 39, 40, 41 y 42 de la ley orgánica electoral, son contrarios á los artículos 89 y 99 de la Carta general de la República, pues conforme éstos preceptos fundamentales, todos los ciudadanos de la República tienen los inviolables derechos de peticion y de reunion, mientras que con arreglo á la ley electoral del Estado, se concede un *derecho exclusivo* para tomar parte en las elecciones, en favor únicamente de los Clubs ó convenciones políticas, establecidas dos meses antes de la eleccion, con los demas requisitos que aquellos artículos previenen; derecho exclusivo que solo los peticionarios dicen haber adquirido, y que vino á destruir el decreto número 370, que amplió el mismo derecho exclusivo á otras asociaciones, aunque su existencia datára de veinte dias antes de la eleccion, conculcándose así el artículo 14 del Pacto fundamental que prohíbe la expedicion de leyes retroactivas, y privándoles del *privilegio exclusivo* de intervenir en la eleccion.

Los solicitantes, como bajo distintos aspectos encuentran conculcados ya los artículos 89 y 99 de la Constitución federal y el 14 de la misma, concluyen pidiendo no se lleven á efecto los decretos 204 y 370, mandando el Juzgado por la urgencia del caso suspender las elecciones de diputados á la Legislatura del Estado, que debian verificarse el Domingo 9 de Noviembre, en todas las municipalidades de Jalisco. En un otro sí los solicitantes recusaron al C. Juez propietario de Distrito, al primer suplente y al secretario; en tal virtud pasó el C. Lic. D. Ignacio Trejo la demanda de amparo al Juez

2º suplente de dicho Juzgado, C. Lic. Ignacio Navarrete, quien calificó legales las interpuestas recusaciones, y se avocó el conocimiento del juicio.

El mismo día 6 de Noviembre, el C. Juez 2º suplente Lic. Ignacio Navarrete, encontrando fundado el anterior recurso en las mismas causas que tuvo para mandar suspender las elecciones municipales cuatro días antes, y con el fin de garantizar los efectos de su voto en el cómputo general; con apoyo de los artículos 3º, 5º, 6º y 25 de la ley de 20 de Enero de 1869, mandó suspender la ejecución de las leyes electorales citadas, pidiendo informe con justificación á las autoridades ejecutoras, á quienes dispuso también se les hiciera saber la suspensión en todo el Estado.

En virtud de este auto, se libraron órdenes á los presidentes de los ayuntamientos del Estado en el mismo día, y en el siguiente al C. Gobernador de Jalisco para la suspensión de las elecciones de diputados que estaban decretadas para el 9 de Noviembre.

El Gobierno contestó inmediatamente al Juzgado, diciendo, que aunque no era el inmediato ejecutor de las leyes electorales, pues esa ejecución estaba confiada á los Ayuntamientos, acataba y haría cumplir la 6ª del Juez de 1º distrito, en los casos del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, siempre que algunas de las autoridades inmediatamente encargadas de los actos electorales, se rehusara á suspenderlos.

Dos días después, el C. Gobernador del Estado, en el informe que rinde al Juzgado, combatiendo las razones que este tuvo para mandar suspender la ejecución de las leyes electorales, dice:

Primero: Que el amparo que se versa, no está fundado en las mismas causas que motivaron la suspensión de las elecciones municipales de la Capital, pues fuera de ella, en los pueblos no hay Clubs ó convenciones políticas que hayan alegado privilegios exclusivos para intervenir en la elección, ni fiscales nombrados para determinadas casillas,

ni municipales empleados; motivos alegados para suspender la elección municipal de Guadalajara, é inaplicable en la general de los pueblos del Estado.

Segundo: Que suspendiendo el Juzgado la ejecución de los decretos 204 y 370 en todo el Estado, ha usurpado facultades que sólo corresponden á la H. Legislatura de Jalisco, y ha conculcado el artículo 102 de la Constitución federal y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, que prohíben en los juicios de amparo hacer declaración general respecto de la ley ó acto reclamado, limitándose las sentencias á proteger y amparar á individuos particulares en los casos sobre que versa el proceso, cosa que aquí no se ha hecho.

Tercero: Que mandando suspender las elecciones generales para garantizar por este medio en el cómputo general el voto de los quejosos, ha dado por consecuencia necesaria la conculcación de la prerrogativa que los ciudadanos todos del Estado tienen para votar en las elecciones populares, con arreglo á la fracción 1ª del artículo 25 de la Constitución general.

Cuarto: que lo que los quejosos allegan para probar que las leyes electorales de Jalisco son contrarias á los artículos 8º, 9º y 14 del pacto federativo, no pasan de sofismas, pues en materia electoral no pueden existir, *ni monopolios, ni privilegios exclusivos*.

Quinto: que el legislador de Jalisco tiene facultades para reglamentar sus elecciones locales, sin que nadie pueda creerse lastimado por que se amplien las condiciones de una futura elección, ó se dispense en ella á los votantes de algún requisito que la ley anterior exigía etc.

Sexto: que los quejosos en el fondo no han pedido otra cosa que la derogación de las leyes electorales de un Estado á que el poder Judicial de la federación, nunca ha podido acceder, conforme al artículo 102 de la Constitución general, en un amparo que de luego debe ser individual.

Setimo: que cualquiera que sea la reso-

lucion definitiva que en este negocio se diere, aun negando el amparo, no por esto se repara el mal causado, ni tampoco las elecciones tendrían lugar sin una nueva convocatoria; pero si por el contrario se declarase la procedencia del amparo en favor de los peticionarios, esa declaracion sería igualmente ineficaz, por haber pasado los momentos en que debia haberse verificado la eleccion, y carecer el tribunal de facultad para mandar continuar la eleccion interumpida, que no puede realizarse sino el dia en que lo determinan las leyes del Estado.

Octavo: por último el C. Gobernador concluye su informe protestando enérgicamente á nombre de Jalisco, por el nuevo ultraje que acaba de recibir, privando á sus habitantes de la mas solemne de sus prerogativas constitucionales, así como que el Estado exija la responsabilidad al Juez 2º suplente, por los atenta los cometidos contra la autonomia de Jalisco.

El C. promotor fiscal en su respuesta de 12 de Noviembre, despues de hacer notar las irregularidades con que el Juez 2º suplente ha procedido en este asunto, pues calificando en la foja 3ª de legales las recusaciones hechas por los quejosos, y que las fojas 4ª y 5ª aun estan llenas de firmas, sin saber si se presentaron antes ó con posterioridad á la demanda, despues de pedir que sobre este punto se haga en la sentencia definitiva la correspondiente demostracion, el citado Promotor fiscal niega la procedencia, tanto del amparo como de la suspension de los actos electorales que debieron tener lugar el 9 de Noviembre, apoyando su opinion en las consideraciones siguientes:

Primera: en la contradiccion que envuelve la solicitud de los peticionarios, ya alegando *derechos exclusivos* para intervenir los clubs independientes en la eleccion, conforme al decreto 204, ya calificando á esta disposicion como inconstitucional por la eracion de esos mismos derechos exclusivos, é implícitamente defendiendo el decreto 370

que limitó aquel monopolio, dando derechos á otros clubs, y en general á todos los ciudadanos.

Segunda: en que las causales por que en Guadalajara se suspendieron las elecciones de municipales y alcaldes, fundamento de la suspension decretada el dia 2, no son aplicables á las municipalidades del Estado, supuesto que para la eleccion general de diputados, no hay ni municipales empleados, ni fiscales trasladados á distintas casillas de las que se les habian designado para cumplir su comision, ni clubs que reclamaran el monopolio de la eleccion.

Tercera: en que para garantizar su voto los quejosos, no han pedido un amparo individual como quiere la ley, sino la suspension general de la eleccion, excluyendo así del cómputo general, tanto su voto como el de todos los ciudadanos del Estado.

Cuarta: en que lo que verdaderamente quieren los solicitantes, es derrocar la actual administracion del Estado, valiéndose de la Justicia de la Union, la que no debe prestarse á tan reprobados manejos.

Quinta: finalmente, en que ni el artículo 102 de la Constitucion general de la República, ni el 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, permiten en esta clase de juicios hacer declaracion general de la ley como se pretende, ni conforme á esas disposiciones pudo dictarse la suspension de las leyes electorales de Jalisco. El Promotor considerando mas marcada malicia en la interposicion del presente amparo, que la que tuvieron los solicitantes al instruir el del dia 2 de Noviembre, concluye pidiendo la revocacion del auto en que se suspendieron las elecciones de diputados al Estado, y se declara que la Justicia federal no ampara ni protege á los peticiones contra las leyes del Estado que mencionan, y se les castigue con una multa de mil pesos á los mismos quejosos.

En este estado el juicio, y habiéndose recibido de la Suprema Corte de Justicia, órdenes terminantes para que el Juez 2º su-

plente se abstuviera de conocer en el amparo que se versa, entregando los autos al Juez 3º suplente que suscribe, vencidas que fueron algunas dificultades opuestas por el C. Navarrete para la entrega, por auto de 15 de Noviembre próximo pasado, y por los fundamentos en él mismo expresados, el infrascrito revocó el de 6 de Noviembre citado, en la parte que acordó se suspendieran las elecciones y los efectos de las leyes del Estado, relativas á la elección de diputados, y mandó recibir por ocho días el negocio á prueba, haciendo saber esta providencia á los interesados, al C. Promotor fiscal y al C. Gobernador del Estado.

Notificado el auto revocatorio, con fecha 18 del expresado Noviembre, el C. Antonio Gil Ochoa, presentó en nombre de las ochenta y cinco personas que suscribieron el escrito de amparo, un escrito de recusación contra el que suscribe; pero estimando este Juzgado que para interponer tal recursión se necesita poder en forma, por auto de 20 del mismo mes, mandó hacer saber á todos los quejosos el escrito de recusación, la cual ratificaron cincuenta de ellos, disponiendo por auto de 4 de Diciembre, se les hiciera saber por medio del periódico oficial á los desconocidos ó ignorados, el contenido del auto de 20 del referido Noviembre.

Cumplimentada por este medio la anterior disposición, en auto de 16 de Diciembre se determinó la remisión de los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se sirviera calificar los motivos de la interpuesta recusación, por no hallarse el caso comprendido en la ley de 23 de Mayo de 1837; aquel Supremo Tribunal en auto de 21 de Enero del presente año, acordó, que el Juez 3º suplente del Juzgado de Distrito, que suscribe, no debía inhibirse del conocimiento del juicio de amparo que se versa; en cuya virtud se mandó llevar adelante el auto de 15 de Noviembre próximo pasado; se notificó á las partes esta providencia, y habiendo terminado los ocho días de prueba, sin que rin-

dieran alguna, el 14 del corriente se le citó para sentencia, dejándose en la secretaría los autos á la vista, para los efectos del artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869.

En tal virtud el infrascrito Juez, considerando:

Primero. Que la solicitud de amparo contra los decretos números 204 y 370 de la Legislatura de Jalisco, envuelve una derogación general de esas mismas disposiciones, para lo cual son incompetentes los Tribunales federales, conforme á los artículos 102 de la Constitución general y 2º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pues según estas prescripciones, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, solo deben ocuparse de individuos particulares, ciñéndose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que versa el juicio, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que lo motivare.

Segundo. Que no es posible deferir al pretendido amparo suspendiendo en favor de unos cuantos particulares de Guadalajara las leyes electorales del Estado, sin privar á los ciudadanos todos de Jalisco de la prerrogativa que la fracción I. del artículo 35 del Pacto federativo, les garantiza, de votar en las elecciones populares.

Tercero. Que nadie, conforme la fracción constitucional últimamente citada, puede alegar en la República privilegios exclusivos para intervenir en una elección popular.

Cuarto. Que ni en las condiciones fijadas en el decreto 204 para la existencia de las convenciones políticas, ni en el 370, hay precepto alguno que restrinja, ni el derecho de petición garantizado por el artículo 8º del Pacto federal, ni el de asociación á que se refiere el artículo constitucional siguiente; pues en el último extremo, la primera de aquellas disposiciones locales no hace otra cosa que reglamentar el derecho de petición, cuando se reclama de palabra un abuso cometido durante las elec-

ciones, dejando á todos los ciudadanos sin distincion de ninguna especie, el mismo derecho de peticion *ejercida por escrito* de una manera pacífica y respetuosa, con la amplitud que le dá el citado artículo de la ley fundamental.

Quinto. Que tampoco al decreto 370 se le ha dado el efecto retroactivo, señalado por los quejosos y que repugnaba el artículo 14 de la Carta federativa, puesto que aquella ley solo facilitó para una eleccion futura la creacion de círculos políticos, sin quitar á los existentes ni á ningún ciudadano en particular, el derecho de emitir su sufragio.

Sesto. Por último, que aunque el amparo es notoriamente improcedente, sin embargo el Juzgado de Distrito no puede imponer la multa á que el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869 se refiere, pues esta facultad es privativa de la Suprema Corte de Justicia.

El infrascrito, con fundamento de los artículos constitucionales citados, y los artículos 2º, 13 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, definitivamente juzgando, falla con las siguientes proposiciones.

Primera. La Justicia de la Union no ampara ni protege á los peticionarios contra los decretos 204 y 370 de la Legislatura de Jalisco.

Segunda. Notifiquese, remitiéndose copia de esta resolucion al «Periódico oficial» del Estado, para su publicacion, y originales estos autos á la Suprema Corte Nacional para su revision, reponiéndose el papel de que se ha usado en esta actuacion, con el del sello correspondiente, por los interesados.

El Juez 3º suplente del Juzgado de Distrito de esta capital, así lo determinó y firmó con testigos de asistencia por recusacion del secretario.—*Lic. T. Bonilla.*—A.—*Guadalupe Zapata.*—A.—*José Ortigosa.*

Es copia, Guadalajara, Marzo 7 de 1874.—*Lic. T. Bonilla.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 6 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por los ciudadanos cuyos nombres aparecen en el escrito de la foja 1ª á la 5ª, contra la aplicacion á las elecciones de diputados á la Legislatura del Estado, que debiera verificarse el día 9 de Noviembre del año pasado, de algunas disposiciones de la ley electoral de 12 de Diciembre de 1870 y decreto de 27 de Setiembre de 1873, que segun han manifestado, violan las garantías consignadas en los artículos 8º, 9º y 14 de la Constitucion federal, haciendo consistir tal violacion; primero: en que única y exclusivamente los fiscales nombrados por las convenciones políticas organizadas conforme á la ley electoral, tienen derecho segun el artículo 42 de esta misma, para reclamar durante los actos electorales, las faltas ó infracciones que en ellos se cometieren; prevencion que limitando el derecho de peticion, viola la garantía consignada en el artículo 8º constitucional; segundo: que los artículos 38, 39, 40 y 41, que conceden una representacion política solamente á las convenciones organizadas conforme á sus disposiciones, vulneran la libertad de asociacion que establece el artículo 9º de la Carta federal, y convirtiendo ese derecho en un monopolio; tercero y último: que el artículo 14 del decreto de Setiembre citado, al dispensar la observancia del artículo 39 de la ley electoral considerando como convenciones políticas á las organizadas veinte dias antes de las elecciones, establece un monopolio dentro de otro monopolio, y dá un efecto retroactivo á sus disposiciones, con el hecho de privar á los clubs á que pertenecen los quejosos, del derecho exclusivo que tenían adquirido de ser considerados como convenciones legales, restringiendo aun mas este derecho el artículo 6º del mismo decreto que estableció que las elecciones de diputados se verificaran el segundo domingo de

Noviembre; todo lo cual constituye una violación del artículo 14 de la Constitución.

Considerando: que el artículo 42 de la ley electoral, no restringe el derecho de petición sino que únicamente lo reglamenta estableciendo, que en caso de haber fiscales nombrados por los clubs, por medio de ellos se hagan todas las reclamaciones á que dieren lugar los abusos cometidos en las elecciones, dejando en libertad á todo ciudadano para hacer esas reclamaciones cuando no hubiere fiscales nombrados al efecto; por cuyo motivo, en nada aparece violado el artículo 89 de la Constitución federal.

Que tampoco hay violación del artículo 9 del mismo Código con el hecho de concederse cierta representación política á las convenciones organizadas conforme á la ley, pues no por esto se vulnera la libertad de asociación.

Que no es un monopolio ni privilegio exclusivo, la representación política concedida por la ley á dichas convenciones, pues la naturaleza del monopolio y del privilegio, consiste en que ninguna otra persona pueda adquirir el derecho constituido á favor de determinados individuos; y por lo contrario, las leyes contra las cuales se solicita el amparo federal, conceden los mismos derechos á cualquiera asociación que sea organizada con las condiciones prescritas; razón por la cual la referida ley de Setiembre, concediendo esos derechos á las convenciones establecidas con veinte días de anticipación á las elecciones, ni establece un monopolio ni ataca privilegio alguno exclusivo de los clubs organizados con dos meses de anterioridad al acto electoral, ni en consecuencia existe violación por este motivo del artículo 14 constitucional.

Que si bien el 29 suplente Lic. Ignacio Navarrete, ha sido ya suspendido en el ejercicio de sus funciones, y consignado al Tribunal de Circuito de Guadalajara por haber decretado la suspensión de las elecciones de diputados, existen otros procedimientos en la sustanciación de este recurso, que autori-

zados por dicho suplente, dan lugar á que también por ellos se le ponga á disposición del Tribunal de Circuito: tales son la irregularidad que se nota en el escrito de solicitud de amparo, en el cual continúan las firmas en segunda de varias providencias judiciales, la calificación hecha por el 29 suplente de la legalidad de la recusación del Juez propietario y excesa del primer suplente, y por último la resistencia que opuso aquel, á obedecer la resolución del C. Presidente de esta Corte, que le prevenia la entrega inmediata del expediente formado con motivo del presente recurso.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 de la Constitución federal, y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta, primera: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 29 suplente de Distrito de Jalisco en 24 de Febrero del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los peticionarios, contra los decretos 204 y 376 de la Legislatura de Jalisco; segundo: Se impone á los quejosos una multa de cien pesos; tercero: Remítanse al Tribunal de Circuito de Guadalajara las constancias conducentes de este recurso, para que surtan sus efectos en el juicio de responsabilidad al Lic. Ignacio Navarrete.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez 39 suplente de Distrito de Jalisco, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Pedro Ojazen*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Simón Guzmán*.—*Luis Velásquez*.—*José García Ramírez*.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de

Junio de 1874.—Alejo Gómez Eguarte, oficial mayor segundo.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon contra los CC. Pedro Flores y otros, por no haberse presentado á cumplir con su encargo de electores por el primer distrito del Estado el dia 23 de Febrero del año próximo pasado, en que se verificó la eleccion de Presidente y dos Magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda, funcionando como promotor, dice: Que los CC. cuyos nombres figuran en la lista que encabeza este expediente, fueron nombrados electores y no concurrieron á la junta tenida en el primer distrito el 23 de Febrero para nombrar Presidente y dos Magistrados de la Suprema Corte, siendo por este motivo consignados á ese juzgado por el Colegio electoral, para que procediera á la averiguacion correspondiente; que hecha esta, han probado los CC. Pedro Flores, José J. Lozano, Guadalupe Niño, Agapito Valdez y Rafael Padilla, que el dia de la eleccion se hallaban enfermos ó ausentes, por lo que parece deben quedar excusados de la pena de suspension en los derechos de ciudadano que les impone la ley electoral. Los CC. Antonio Treviño y Blas Ayala Guerra, han probado tambien que con mas ó menos fundamento esperaban ser citados á la eleccion de que se trata, lo que importa tanto como una ignorancia de ley que no los excusa; que el C. José María Treviño y Treviño, no ha probado la enfermedad de que adoleció, pero sí que el dia de la eleccion no salió de su casa; que por lo espuesto, y con-

siderando que ningun individuo medianamente ilustrado renuncie voluntariamente el derecho de elegir, que es una de las primicias y mas estimables prerrogativas del C., concluye proponiendo: 1º Se sobresee en la presente averiguacion respecto de los CC. Pedro Flores, José J. Lozano, Guadalupe Niño, Agapito Valdez y Rafael Padilla, por no haber intentos para continuarla. 2º Amonéstase á los CC. Antonio Treviño, Blas Ayala Guerra y José María Treviño y Treviño, para que en lo sucesivo sean mas exactos en el cumplimiento de los deberes que tienen como CC., advirtiéndoles al 1º y 2º que la ignorancia de la ley á nadie excusa.

Monterrey, Mayo 28 de 1873.—A. Treviño.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterrey, Enero 8 de 1874.—Vista esta sumaria instruida á excitaba del Colegio electoral del primer distrito de este Estado, en averiguacion de la responsabilidad que hayan contraido los electores CC. Pedro Flores, José J. Lozano, Guadalupe Niño, Antonio Treviño, Blas Ayala Guerra, Agapito Valdez, José María Treviño y Treviño y Rafael Padilla, por no haber concurrido á desempeñar el cargo que se les encomendó en la eleccion de Presidente y dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que se verificó el 23 de Febrero del año próximo pasado. Vistas las inquisitivas de los presuntos reos, en que manifiestan los motivos que tuvieron para no concurrir á la eleccion, los cuales aparecen plenamente justificados con las declaraciones de algunos testigos que citaron respectivamente en sus inquisitivas, para probar su excepcion, justificando los CC. Antonio Treviño y Blas Ayala Guerra, que no asistieron á la eleccion por que les manifestó la persona que les entregó sus credenciales, que debian ser citados el dia de la